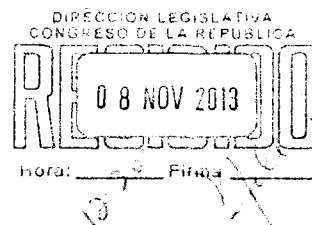




00000013

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Guatemala, 05 de noviembre del año 2013



Señor
Marvin Alvarado
Director Legislativo Interino
Congreso de la República
Su Despacho

Estimado señor Alvarado:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es que de conformidad con los artículos treinta y nueve (39), cuarenta (40), y cuarenta y uno (41) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto al presente le remito el **DICTAMEN DESFAVORABLE** de la Iniciativa de Ley número de Registro cuatro mil doscientos treinta y nueve, la cual disponía aprobar "**Ley Normativa de la Pena Capital**", emitido en la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia el día veintitrés de septiembre del año dos mil trece.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Diputado Luis Pedro Álvarez Morales
Presidente
Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia

C.c./ Archivo



00000014

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**INICIATIVA NÚMERO 4239. INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR "LEY
NORMATIVA DE LA PENA CAPITAL".**

DICTAMEN NEGATIVO

HONORABLE PLENO:

Con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diez, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia la iniciativa que dispone aprobar "Ley Normativa de la Pena Capital", para su estudio y dictamen correspondiente. Dicha iniciativa se encuentra identificada con el Registro número cuatro mil doscientos treinta y nueve (4239) de Dirección Legislativa, y fue presentada por los Diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro, Manuel Antonio Baldizón Méndez y compañeros.

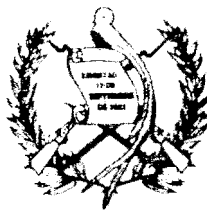
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Esta Comisión, al desarrollar el proceso de análisis de la iniciativa de ley en mención hace las siguientes consideraciones:

1. Contenido de la Iniciativa:

El objeto de la creación de la presente iniciativa de ley, de acuerdo a la justificación de los ponentes, es en virtud que la legislación guatemalteca vigente, contempla la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos de alto impacto social, por lo que de acuerdo a los Tratados Internacionales, firmados y ratificados por la República de Guatemala, se debe contar con la legislación que regule el proceso para la conmutación de la pena de muerte así como la exigencia de la aplicación inmediata de la Pena de Muerte, en amparo al Pacto de San José.

- 1.1. La iniciativa de ley se compone de diez artículos. El último artículo se refiere a la vigencia.



00000015

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- 1.2. Se puede decir entonces que la naturaleza, objeto y contenido de la figura que se pretende regular con la iniciativa en mención, se encuentra en los artículos del uno al nueve, transcribiendo los mismos y siendo estos los siguientes:
- 1.2.1. "ARTICULO 1. Objetivo. La presente ley normativa de la pena capital tiene el objetivo de establecer la competencia jurídica de la autoridad u órgano facultado para conocer y resolver sobre el recurso de gracia."
 - 1.2.2. "ARTICULO 2. Facultad exclusiva. Tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por sorteo entre sus integrantes, tendrán la facultad conocer y resolver la solicitud de conmutación de la pena de muerte, por la pena máxima contemplada para el delito cometido."
 - 1.2.3. "ARTICULO 3. Rechazo. Por ningún motivo podrá rechazarse la solicitud de conmutación de la pena de muerte, por lo que deberá conocer y resolver afirmativa o negativamente."
 - 1.2.4. "ARTICULO 4. Solicitud. Le podría interponer por su Abogado defensor, deberá hacerse por escrito acompañada de una exposición pertinente sobre los hechos y circunstancias del proceso."
 - 1.2.5. "ARTICULO 5. Plazo de interposición. Deberá presentarse la solicitud dentro de tres días siguientes de encontrarse firme el fallo que condene a la pena de muerte. Vencido el plazo se entenderá que renunció al derecho de obtener la conmuta de la pena impuesta por la pena de prisión máxima. Interpuesta la solicitud quedará en suspenso la aplicación de la pena de muerte."
 - 1.2.6. "ARTICULO 6. Trámite y resolución. Planteada la solicitud de conmutación de la pena de muerte, los magistrados pedirán en su primera resolución los antecedentes a donde corresponda, los que deberán ser enviados sin excusa dentro de las veinticuatro horas siguientes a su requerimiento. La resolución debe dictarse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del expediente, la que podrá rechazar la solicitud u otorgar la conmutación de la pena de muerte por la pena máxima de prisión."
 - 1.2.7. "ARTICULO 7. Resolución. Siendo una resolución de conciencia, la misma tendrá el carácter de una resolución y no requiere de requisito alguno. Se podrá realizar las apreciaciones legales, morales, científicas, humanas o de cualquier otra naturaleza que estime oportuno."



00000016

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- 1.2.8. "ARTICULO 8. Notificación. La resolución que se emita cualquiera que sea el resultado, deberá notificarse al reo o su abogado defensor, así como al juez executor o tribunal que corresponda para la prosecución del trámite respectivo."
- 1.2.9. "ARTICULO 9. Recursos. Contra la resolución que deniegue o conceda la conmutación de la pena de muerte no cabe recurso ni solicitud alguna. Para la tramitación del presente recurso, todos los días y horas son hábiles. Las resoluciones se notificarán dentro de las veinticuatro horas siguientes."

2. Sobre la figura de "Ley Normativa de la Pena Capital", en relación con la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias y leyes especiales:

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Los antecedentes que atañen el procedimiento del Recurso de Gracia o Conmuta de la Pena de Muerte, son los siguientes:

- La Asamblea Nacional Legislativa de la República aprobó con fecha 19 de abril de 1892, el Decreto No. 159 que reglamentaba el artículo 78 de la Constitución Política vigente en ese entonces, la facultad del Presidente de la República para conmutar la pena de muerte y conceder indultos en los casos previstos, disposición constitucional que con algunas variantes se mantuvo en Constituciones Posteriores hasta que en 1985 se promulgó la actual Constitución Política de la República, la cual no la contempla.
- El decreto 45 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 1944 estipulaba que el Decreto 159 mencionado en el inciso anterior, conservaría su vigencia y fuerza legal mientras se emitiera la nueva Carta Magna de la República.
- La Constitución Política de la República, promulgada en Asamblea Nacional Constituyente el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, derogó expresamente todas las Constituciones de la República de Guatemala anteriores, en su artículo 22 de Disposiciones Transitorias y Finales. En

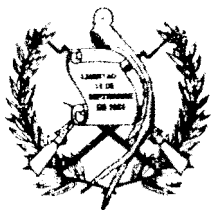


00000017

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

nuestra nueva Carta Magna se estableció la independencia de poderes en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al declarar que la soberanía radica en el pueblo en su artículo 152. Sin embargo, no regula la conmutación de la pena y/o recurso de gracia.

- El Decreto legislativo número 32-2000 derogó expresamente el Recurso de Gracia, establecido en el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa emitido con fecha diecinueve de abril de mil ochocientos noventa y dos, no obstante que el mismo, con la promulgación de la Nueva Constitución Política de la República ya había sido derogado, como ya relacionamos.
- El Congreso de la República, emitió el Decreto número seis guión dos mil ocho, el doce de febrero del año dos mil ocho, el cual contenía Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a muerte, en el cual se establecía el procedimiento para la solicitud de la Conmutación de la Pena de muerte, en la misma se estipulaba que la facultad para conceder la conmutación de la pena correspondía al Presidente de la República. Sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo número ciento cuatro guión dos mil ocho, de fecha catorce de marzo del dos mil ocho, el Presidente de la República en ese entonces, Álvaro Colom Caballeros, vetó el Decreto número seis guión dos mil ocho, quedando sin efecto jurídico en Decreto en mención.
- El Congreso de la República, emitió el Decreto número treinta y siete guión dos mil diez, el cinco de octubre del año dos mil diez, el cual contenía Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte, en el cual se establecía el procedimiento para la solicitud de la Conmutación de la Pena de muerte, en la misma se estipulaba que la facultad para conceder la conmutación de la pena correspondía al Presidente de la República. Sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo número trescientos siete guión dos mil diez, de fecha cuatro de noviembre del año dos mil diez, el Presidente de la República en ese entonces, Álvaro Colom Caballeros, vetó el Decreto número treinta y siete guión dos mil diez, quedando sin efecto jurídico en Decreto en mención.



00000018

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

En ambos acuerdos gubernativos se argumentó que el plazo del silencio administrativo y el plazo para solicitar la conmutación de la pena infringían la “seguridad jurídica” que debe garantizar el Estado a los habitantes de la República. Asimismo indicaba que con el argumento de crear el procedimiento para otorgar la conmutación de la pena o recurso de gracia, lo que se estaba haciendo implícitamente era restaurar la ejecución de la pena de muerte, esto fue en ambos Acuerdos Gubernativos, pues los Decretos Vetados de igual forma eran idénticos.

2.2 CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Los miembros de la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, después de haber realizado un profundo análisis, estudio y discusión del contenido de la Iniciativa de Ley número cuatro mil doscientos treinta y nueve (4239), la cual dispone aprobar “Ley Normativa de la Pena Capital”, ha podido establecer, que si bien es cierto en la Legislación Guatemalteca debió existir la posibilidad de generar una normativa para que en forma extraordinaria y por razones estrictamente humanitarias y de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se conozca, analice y resuelva la solicitud de la persona condenada a muerte el indulto o la conmutación de la pena de muerte, sin embargo de conformidad con la Constitución Política de la República vigente, enmarca claramente la división de poderes del Estado. La competencia de los tres organismos del estado la establece imperativamente la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizando su independencia, considerando que la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Específicamente el artículo 141 de la Constitución establece literalmente que: **“La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida”**. Por lo tanto, cada organismo del estado tiene una competencia asignada así como las limitaciones a dicha competencia, siendo la misma la siguiente:

1. Las funciones del Organismo Legislativo están principalmente reguladas en los artículos 157, 170 y 171 de la Constitución. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, que tiene como atribución esencial decretar, reformar y derogar las leyes; así como la de fiscalizar las operaciones administrativas y de erogación de fondos del Estado de los Organismos



00000019

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- Ejecutivo y Judicial y de su propio organismo, esto de acuerdo a lo preceptuado en el artículo ciento cincuenta y siete y ciento setenta y uno de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. El artículo ciento ochenta y dos y ciento ochenta y tres de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la competencia del Organismo Ejecutivo, en la cual se establece que el Presidente de la Republica es el Jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo y entre sus funciones se encuentran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación.
 3. Por último, el artículo doscientos tres de la Constitución Política de la Republica, estipula en su parte conducente: "Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la Republica. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones...", asimismo el artículo cincuenta y dos de la Ley del Organismo Judicial establece que "Las funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado" y el artículo cincuenta y siete de la Ley del Organismo Judicial establece en su parte conducente: "Artículo 57.- Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado..."

Por lo tanto en base a las consideraciones citadas, corresponde al Organismo Judicial y tribunales de justicia, con exclusividad, la aplicación de justicia. La única conmutación de la pena posible en concordancia con nuestra Constitución Política vigente está regulada en el artículo 50 del Código Penal y se refiere con exclusividad a penas de prisión que no excedan de 5 años. La conmutación de la pena a la que se



00000020

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

hace relación en el artículo 43 del Código Penal, dejó de ser viable al tenor de nuestra Constitución vigente.

Asimismo, podemos destacar que la Corte de Constitucionalidad ha emitido sentencias en las cuales en reiteradas ocasiones hizo una enmarcada referencia en la independencia y exclusividad que posee el Organismo Judicial en cuanto a la administración de justicia, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, cumpliendo con el principio de legalidad y de constitucionalidad, estableciendo que el espíritu de los artículos doscientos tres, doscientos cuatro y doscientos cinco de la Constitución Política de la República es investir al Organismo Judicial de garantías sin las cuales no sería posible concebir un sistema de justicia que d[e a los particulares la seguridad jurídica que las resoluciones judiciales estarán revestidas de objetividad e imparcialidad. Las Gacetas Jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad que fundamentan lo anteriormente detallado, son las siguientes:

- Gaceta Jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad número 43, Expediente número 963-96. Apelación de Sentencia de Amparo. Guatemala, 29 de enero de 1997.
- Gaceta Jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad número 60, Expediente número 685-2000. Apelación de Sentencia de Amparo. Guatemala, 04 de abril de 2001.
- Gaceta Jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad número 162, Expediente número 249-95. Apelación de Sentencia de Amparo. Guatemala, 25 de enero de 1996.

Actualmente, no existen condenados a pena de muerte, pues a principios del presente año, la Corte Suprema de Justicia anuló la pena de muerte a los cincuenta y cuatro condenados, por haberse violentado su derecho a la legítima defensa, sentenciando a los mismos a hasta cincuenta años de prisión, asimismo las estadísticas revelan que los tribunales de justicia, desde hace cuatro años no emiten sentencias a pena de muerte. Dichas disposiciones han sido en virtud que en muchos de los casos los jueces de sentencia habían establecido la peligrosidad mediante la consideración de las características y modalidad del delito cometido por los acusados de acuerdo a lo preceptuado en el artículo ciento treinta y dos del Decreto número diecisiete guión setenta y tres, Código Penal en el que se establece: "...Al reo, de asesinato, se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la



00000021

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente...” manifestando la Corte, específicamente en la Acción de Revisión uno guión dos mil cinco en el caso “Huales y Guales” que “para poder afirmar que una persona es peligrosa (social y/o criminal), debe previamente existir un estudio pericial que refleje factores personales de agresividad, impulsividad y violencia; así como enfermedades psiquiátricas, trastornos de personalidad, problemas relacionados con el entorno familiar, escolar, laboral y ambiental”, por lo que al ordenar la Corte estos informes periciales pudo percatar que los mismos eran de suma importancia pues en el caso “Huales y Guales” dichos estudios periciales demostraban que ambos carecían de la peligrosidad sostenida en la sentencia de primera instancia, es por ello que la Corte entendió que estos informes constituían hechos nuevos que confirmaban la inexistencia de la peligrosidad requerida por el artículo ciento treinta y dos del Código Penal y que por lo tanto era procedente el Recurso de Revisión de la Condena de Pena de Muerte. La conmutación a la pena máxima de los condenados a pena de muerte, se dieron por: 1. Error judicial ocurrido por falta de conocimiento oportuno de un hecho y 2. Porque en aquellas sentencias que se impusieron atendiendo a la peligrosidad del agente, atendiendo a las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de derechos Humanos, específicamente en los casos conocidos como “Raxcacó Reyes vs. Guatemala” y “Fermín Ramírez vs. Guatemala”, es difícil el poder determinar dicha peligrosidad, por lo que el resultado de los Recursos de Revisión procedentes se determinó que en las sentencias se violentaron el principio de legalidad y, además, el derecho de audiencia, defensa y debido proceso, los anterior lo podemos notar en los siguientes expedientes: A. Revisión 2410-2011; B. Revisión 6-2009; C. Revisión 328-2011; Revisión 1563-2011, entre otros.

La Iniciativa de Ley en mención estipula que la autoridad encargada y competente de conocer y resolver sobre el Recurso de Gracia debiera de recaer en tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sin embargo el artículo doscientos sesenta y ocho de la Constitución Política de la República, establece cuál es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se cita literalmente dicho artículo el cual reza “Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia...”. Así podemos también establecer que el artículo de la Constitución Política de la República, el cual se refiere a las Funciones de la Corte de Constitucionalidad, ninguno de ellos norma lo relativo al procedimiento



00000022

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

del Recurso de Gracia, pues claramente podemos notar que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del Orden Constitucional, dicha defensa del Orden Constitucional consiste en la atribución de las competencias a los diferentes Órganos del Estado conforme a la normativa suprema del país, esto según lo establecido en la Gaceta Jurisprudencial número cuarenta y tres, de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, expediente número novecientos sesenta y tres guión noventa y seis, así como también le corresponde el control constitucional de las leyes y conocer todos los procesos de amparo, por lo tanto no le correspondería conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Gracia como Tribunal especial.

Por último, por técnica legislativa, el nombre de la iniciativa de ley en estudio, es confuso e induce a error, pues hace relación a una "normativa de la pena capital" cuando en realidad lo que busca es regular el indulto o recurso de gracia, es decir, la regulación de la conmutación de la pena capital no de su aplicación.

2.3 DICTAMEN DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA.

En base a las consideraciones vertidas por la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia se emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** de la Iniciativa de Ley número cuatro mil doscientos treinta y nueve, en virtud que la Constitución Política de la República establece claramente la División de Poderes del Estado, así como las funciones específicas de la Corte de Constitucionalidad, correspondiéndole en consecuencia con exclusividad al Organismo Judicial la administración de justicia, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Considerando esta Comisión y atendiendo a lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es cierto debiera en teoría existir una regulación de un Recurso de Gracia en nuestra legislación, más allá de ello y en base a los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala mencionados, se recomienda al Honorable Pleno del Congreso de la República contemplar la abolición de la Pena de Muerte para evitar estas etéreas discusiones.



00000023

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL
SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

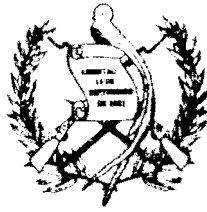
Diputado Luis Redro Álvarez Morales
Presidente

Diputado Carlos Enrique López Girón
Vicepresidente

Diputado Juan José Porras Castillo

Diputado Álvaro González Ricci

Diputada Sofía Jeaneth Hernández Herrera



00000024

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Diputado
Mayorga

Gustavo

Adolfo

Echeverría

Diputado Manuel de Jesús Barquín Durán

Diputado Selvin Boanerges García Velásquez

Diputado Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán

Diputado Leonardo Camey Curup